

EL FORO VALENCIANO,

REVISTA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

Esta Revista se publica los días 1 y 15 de cada mes.

Se suscribe en Valencia en el centro de suscripciones plaza de la Constitucion, y en la imprenta de José Rius, calle del Milagro. Fuera, dirigiéndose á la Redaccion del *Foro Valenciano*, calle de Náquera, núm. 2, remitiendo el importe de la suscripcion en sellos de franqueo ó libranzas del giro mútuo. — PREGIO DE SUSCRICION: 3 rs. al mes en Valencia y 8 por bimestre fuera, franco de porte.

Comunicacion de la Junta de Gobierno del M. I. Colegio de Abogados de Valencia.

«La Junta de Gobierno tuvo la complacencia de someter á la general celebrada el 20 del corriente el siguiente acuerdo, que fue aprobado por unanimidad.

La Junta de Gobierno ha visto con satisfaccion la publicacion, por algunos celosos individuos del Colegio de esta ciudad, de un periódico consagrado á dar publicidad á los trabajos mas notables del *Foro Valenciano*, y deseosa de que el Colegio contribuya por su parte al buen éxito de esta publicacion, propone á la Junta general le dispense su apoyo, y al efecto se le comuniquen para su publicacion las actas y acuerdos tanto de la Junta general como de la de Gobierno, que á juicio de ésta tengan un interés general para los individuos del Colegio.

Lo que tengo el gusto de transcribir á VV. SS. para su conocimiento y satisfaccion.

Dios guarde á VV. SS. muchos años. Valencia 22 de Diciembre de 1857. — Tomás Esteve, Secretario. — Señores Redactores del *Foro Valenciano*»

Hemos transcrito el anterior oficio, y le hemos transcrito en el lugar preferente del periódico, no por hacer orgulloso alarde de esa honrosa distincion, que tan escasa ocasion hemos tenido de merecer, sino en prueba del alto precio en que la tenemos, y de la gratitud que nos inspira. Para nosotros la significacion de ese acuer-

do que la dignísima Junta de Gobierno del Colegio propuso, y la general se dignó aprobar por unanimidad, no es otra que el haber ambas comprendido exactamente el propósito que guia la publicacion del *Foro Valenciano*; y tenido la dignacion de alentarlo. No lleva éste, como dijimos en el prospecto, mira alguna personal de sus redactores; solo les anima el deseo de que sea un órgano digno de nuestra clase y de las demás que intervienen en la administracion de justicia. Las columnas del *Foro Valenciano*, hemos dicho y repetimos, están abiertas para cuantos compañeros quieran aprovecharlas, y con ello no harán sino contribuir al mayor interés de un periódico que sinceramente les ofrecemos como suyo. El acuerdo transcrito ha venido á reanimar nuestro propósito y á aumentar en cuanto cabe la fe con que comenzamos no há mucho á egecutarle. Tributamos por ello las mas sinceras gracias á la Junta general y asimismo á la de Gobierno á cuya propuesta se efectuó aquel acuerdo, y haremos cuanto en nosotros quepa para no defraudar la intencion con que se nos ha dispensado tan distinguido favor.

Por la Redaccion, Eduardo Atard.

OBSERVACIONES

á la Ley de enjuiciamiento civil.

Los títulos 9 y 10 de la Ley de enjuiciamiento civil son sin duda de los que mayores inconvenientes están ofreciendo en la práctica.

Sea que carecíamos de una Ley tan ordenada y completa en materia de abintestato y testamentarias, sea que muchas de las disposiciones de la nueva Ley están en oposicion con las prácticas establecidas; lo cierto es, que en la aplicación de las disposiciones de los citados títulos se observa mayor divergencia de pareceres y mas diversidad de procedimiento en los Tribunales que en los demás de la misma Ley. Por eso han llamado tambien mas especialmente la atencion de los que nos hallamos dedicados á la carrera del Foro por la continua aplicación que necesitamos hacer de las disposiciones legales en la versacion de estas materias, y deseamos traerlas cuanto antes al terreno de la discusion ávidos de las verdades de la ciencia que profesamos. Y puesto que la jurisprudencia que suplia el gran vacío que se hallaba en los procedimientos de los juicios de abintestato y de testamentaria ha de ceder su puesto á las prescripciones de la Ley vigente, ninguna otra tarea mas útil para los que experimentamos de cerca los inconvenientes de la discordancia en los procedimientos que la de dar á conocer esos mismos inconvenientes, que ora nazcan del silencio de la Ley, ora de las diversas interpretaciones á que se presten sus disposiciones, necesitan debatirse para llegar á formar un sistema que sea generalmente admitido.

Con este propósito, y muy lejos de toda otra aspiracion, comenzaremos nuestra tarea por la proposicion siguiente:

En las participaciones de herencia, en que interesan menores de edad ó incapacitados, es necesaria la aprobacion judicial cuando se practican extrajudicialmente por haberlo dispuesto así el testador?

Las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento civil en que pueda apoyarse la contestacion negativa no son tan terminantes que hayan dejado de suscitar la duda y aun inclinado á varios comentaristas de la Ley á opinar en sentido contrario, afirmando que los contadores en el caso de llevar á efecto la particion de la heren-

cia extrajudicialmente deben protocolizarla, previa la aprobacion de Juez competente. Quién asegura ser necesaria la aprobacion judicial para la formalidad del acto y seguridad de los bienes; quién afirma que las Leyes recopiladas no pueden considerarse modificadas en esta parte por la nueva Ley, tanto porque el caso no se halla previsto en la misma, cuanto porque, según el principio que en ella domina, la intervencion y aprobacion judicial es necesaria en todos los actos en que puedan ocasionarse perjuicios á menores ó incapacitados; pero nosotros respetando las opiniones que dejamos transcritas, disenti-mos no obstante de ellas, porque creemos ver en las disposiciones de la nueva Ley bastante fundamento para sostener que no es necesario obtener la aprobacion judicial de la particion en el caso de que nos ocupamos.

Si volvemos la vista á la legislacion que dejó de regir en 31 de Diciembre de 1855, para los pleitos posteriores á esta fecha, encontramos la Ley 10, tit. 21, lib. 10, Novísima Recopilacion, en la que terminantemente se dispone que los albaceas, tutores ó testamentarios que señalen los testadores formen los aprecio, cuentas y particiones de sus bienes, cumpliendo despues dichos testamentarios con presentar las diligencias ante la justicia del pueblo para su aprobacion y que se protocolicen en los oficios del juzgado del Juez ante quien se presenten; y mas terminante todavia la Real resolucion de 20 de Enero de 1792, inserta en la nota 10 de dicho tit. 21, por la cual «se sirvió S. M. declarar, que cuando el padre nombra en su testamento contador y partididor extrajudicial, y las partes están conformes en que tenga efecto, no debe impedirse por la justicia, aun cuando haya menores ó ausentes; quedando á salvo el acto de aprobacion de la cuenta y adjudicaciones que se practiquen por el comisionado, y el poder reparar entonces cualquiera agravio que justamente se notase, por ser esto lo mas conforme á las Leyes, y á las amplias facultades que por ellas se conceden á los testadores y señaladamente á

los padres etc. Las prescripciones de estas Leyes no ofrecen la menor duda acerca de la necesidad de obtener la aprobacion judicial de las particiones hechas extrajudicialmente. Sin embargo, al autor de la libreria de Jueces, abogados y escribanos, que por tantos años ha sido el libro cuasi exclusivo para la enseñanza de la práctica de los juicios le pareció opinar de otro modo, diciendo que no es necesaria en este caso dicha aprobacion: las razones de una opinion tan diametralmente opuesta á la Ley, no nos inspiran el menor convencimiento.

Si el testador, dice Febrero, tiene facultad para dividir su hacienda entre sus herederos legítimos y extraños sin que sea necesario la intervencion y aprobacion judicial; si varias Leyes recopiladas le permiten dar poder á las personas que quiera para ordenar su testamento, nombrar tutores y hacer todo lo que deje de practicar por sí propio; ¿por qué no ha de poder conferirlo tambien para que sin dicha intervencion ni aprobacion hagan el inventario, tasacion y particion de sus bienes? No puede, continúa diciendo, la falta de Juez ocasionar perjuicios á los menores, porque les queda salvo su derecho hasta los 29 años para reclamar; porque el Juez, si las partes se conforman con las particiones, las aprueba, estén bien ó mal hechas, y aunque interponga su autoridad, siempre es en cuanto há lugar en derecho. Nosotros, sin embargo, no creemos que pueda darse á las Leyes recopiladas citadas por Febrero la aplicacion que pretende; ni somos de parecer que puede prescindirse de todas las formalidades legales en los asuntos de menores, porque la Ley les concede el beneficio de la restitucion: ni podemos atribuir á toda la respetable clase judicial la inculpacion que le atribuye el citado autor. Por eso no hemos seguido su opinion mientras han estado vigentes las Leyes recopiladas de que acabamos de hacer mencion.

Empero esas Leyes no solamente han sido modificadas por la Ley de enjuiciamiento, sino espresamente derogadas, y en nuestro sentir no

podemos apoyarnos en sus disposiciones para defender la afirmativa en la proposicion que hemos sentado al principio. El artículo 1.º 415 dice: «Quedan derogadas todas las Leyes, Reales decretos, reglamentos, órdenes y fueros en que se hayan dictado reglas para el enjuiciamiento civil:» luego en las prescripciones de la nueva Ley es en donde hemos de buscar solamente las razones para seguir ésta ó la otra opinion. Ni damos mas valor para defender la nuestra á las razones de Febrero, porque no se le pueden oponer ahora las terminantes disposiciones de la legislacion antigua: de ningun modo, nosotros prescindiremos de ellas y solo aprovecharemos el texto de la Ley vigente para emitir nuestro parecer y el silencio de la Ley para robustecerlo.

El artículo 498 dice «solo se prevendrá el juicio necesario de testamentaria en los casos determinados en el art. 407; y en este artículo en el número segundo que hace á nuestro propósito dice: «cuando los herederos son menores ó están incapacitados, bien se hallen ausentes ó presentes, si el testador no hubiese dispuesto lo contrario.» La prevencion del juicio necesario de testamentaria tanto quiere decir como la necesidad legal de la intervencion judicial en las operaciones de la testamentaria, en la formacion del inventario, avalúo de bienes y division, que son los tres periodos en que la Ley ha dividido el juicio. Pero la Ley ha puesto una limitacion á esa intervencion judicial en los casos del número segundo, y es «si el testador no hubiese dispuesto lo contrario:» por manera que si el testador hubiese prohibido esa intervencion, el Juez no podrá prevenir el juicio necesario. Si no puede prevenirlo, no habrá juicio, y para no haberlo es preciso que no intervenga en ninguna de las operaciones de los tres periodos. ¿Y se quiere que en las particiones hechas extrajudicialmente se obtenga la aprobacion judicial, esto es, que el Juez intervenga en las últimas diligencias del tercer período, á las que con mas propiedad se le puede llamar juicio? ¿Ni como aprueba el Juez la particion sin examinar sus

tres períodos, y exigir cuantos datos crea necesarios para cerciorarse del acierto de las operaciones practicadas? ¿Y entonces qué es de la limitación que la Ley pone á los casos del número segundo? ¿Qué es de la voluntad del testador que ha prohibido la intervención judicial? Creemos que la genuina inteligencia de la limitación de la Ley es la que esponemos; y viene á robustecer nuestra creencia el silencio que guarda la Ley acerca del modo de presentar á la aprobación judicial las particiones estrajudiciales y las formalidades con que haya de procederse para que recaiga esa aprobación, así como lo ha prescrito para la venta de bienes de menores, la transacción sobre sus derechos y otros muchos casos.

No tenemos, sin embargo, la presunción de que nuestra opinión sea la mas acertada, ni sería ésta por cierto si pudiera servir de base de nuestra argumentación la utilidad de la intervención judicial para los intereses y derechos de los menores ó incapacitados. Ya se ha visto que no hemos salido del estrecho círculo de la Ley para dar nuestra solución á una cuestión que otros han iniciado; y con gusto haríamos el sacrificio de nuestra opinión si en el debate prevaleciese otra mas ilustrada y mas adecuada á la letra y espíritu de la legislación vigente.

Atentos solamente á dilucidar la proposición que tomamos por objeto, hemos prescindido de otras cuestiones á que dá lugar la inteligencia del art. 407 de la ley, de las que nos ocuparemos en los números sucesivos.

Simon Cirujeda.

DERECHO ADMINISTRATIVO.

ARTÍCULO I.

Uno de los estudios mas interesantes para el Jurisconsulto que aspire á ejercer la noble carrera de la abogacía con el acierto y lucimiento que exige lo árduo y difícil de su misión, es, á no dudar, el de la ciencia administrativa, que abraza cuestiones de elevadísimo

interés por su objeto, y de frecuente y cuasidaria aplicación en el Foro. Por eso aplaudimos el pensamiento del Gobierno al elevar á categoría de carrera el estudio del derecho administrativo; dotando á nuestras universidades de profesores entendidos que difundan los elementos de la ciencia, y esclarezcan con sus elucubraciones los diversos ramos que abraza, en variedad inmensa, esa rama tan importante del poder ejecutivo.

Porque era verdaderamente triste y desconsolador al que con desimpresionada crítica examinaba el estado de todos los ramos del saber en España, ver cuán descuidado, cuán desatendido, cuán abandonado se hallaba el estudio de tan principal materia; hasta el punto de ser mirado como una notabilidad el que á fuerza de trabajo lograba marchar con desembarazo por entre el confuso laberinto de la administración, y conseguía distinguir, en la dirección de los negocios, la línea apenas visible que separaba lo administrativo de lo judicial. Y no bastaba la fuerza de voluntad, la aplicación mas asidua, el continuo y laborioso análisis de las Leyes y Reglamentos á dar con los principios invariables del derecho, para aconsejar en cuestiones dadas el curso que debía seguir un expediente, no: al afán de acierto se oponía un obstáculo invencible; se oponía la carencia de tratados metódicos que sirviesen, no tanto para dar luz en la senda que debía recorrer el abogado, cuanto para ilustrar la conciencia de las autoridades y de los dependientes de la administración, que en muchas ocasiones entendían, ó reclamaban el conocimiento de un negocio, que debía someterse al fallo de tribunal diferente, originándose conflictos de difícil solución. Notábase por esta causa lamentable retraso en el despacho de los expedientes, con grave daño y menoscabo de los intereses públicos y particulares.

Hoy por hoy se ha remediado en gran parte el mal; y tanto en la ley vigente de Instrucción pública, como en las anteriores, se

designan cursos académicos para la enseñanza del derecho administrativo, con la cual se consiguen dos ventajas muy notables: primera, que el estudio y afición á la ciencia administrativa se propague y generalice: segunda, que en las vastas dependencias del ministerio de la Gobernacion y de Fomento, no se proceda empírica, rutinaria y muchas veces arbitrariamente como antes acontecia: en suma, los particulares y las corporaciones encuentran en el despacho de un Letrado, direccion hábil y arreglada; en los tribunales administrativos, formas justas, prácticas de tramitacion reglamentadas, y fallos razonados.

Pero, ¿existe en España el derecho administrativo? Si hemos de contestar á esta pregunta con sujecion á los dogmas de las escuelas, en las que se toma en sentido de coleccion de Leyes, claro es que no existe entre nosotros un código que reúna las establecidas para el arreglo de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Así como á la reunion de Leyes que clasifican los delitos, asignan las penas, y fijan el modo de proceder para el descubrimiento de aquellas, y la debida aplicacion de éstas, se dá el nombre de derecho criminal, así con razon se llamaria derecho administrativo si existiera igual conjunto de reglas sobre la materia. Mas, si por derecho administrativo quiere darse á entender la existencia de Leyes dictadas para proteger las personas y las propiedades, garantizar el uso de las cosas comunes, ejecutar las medidas de interés general, favoreciendo el desarrollo de la agricultura, industria y comercio, y para otros objetos de interés colectivo, en ese caso sabido es que tenemos derecho patrio administrativo; puesto que no solo de reciente se han publicado Leyes oportunas, sino que se registran ya de antiguo en nuestros Códigos innumerables disposiciones, que abrazan todos los ramos de la administracion del Reino.

Es verdad, que entre la confusion que reina en Leyes hechas durante tantos siglos, pro-

ducto de gobiernos en que han predominado no solo diferentes, sino encontrados y opuestos principios, hay dificultad suma para distinguir lo derogado de aquello que debe estar vigente; pero esto no debe arredrar al hombre estudioso, ni detenerlo en su camino de análisis y de investigacion, con el fin de encontrar reglas seguras que guien en la aplicacion verdadera de las Leyes, y de contribuir en cuanto permita su complicacion á dar vida á una jurisprudencia administrativa de aplicacion fácil, y de resultados de utilidad incontestable.

Porque, si lo meditamos bien, y es preciso que en este punto no se formen ilusiones los hombres aficionados á la ciencia, tal como hoy se encuentra nuestra Nacion, no es dable abrigar la esperanza de que pueda formarse un Código que abrace en toda su estension el derecho administrativo, así como la tenemos fundada de que los adelantos y perfeccionamiento á que han llegado todos los ramos que comprende el derecho civil, hacen no solo posible, sino fácil, la creacion de un Código. Nos asiste para hablar así, una razon muy poderosa. El orden administrativo en nuestra Nacion no puede, atendida la organizacion íntima de los poderes públicos, separarse, aislarse, desprenderse de la parte política, y ha de recibir de ésta precisa y necesariamente el sello, el carácter, la fisonomía. No basta administrar bien, se dice: es necesario administrar con arreglo á los principios políticos que egercen el predominio de la cosa pública.

Para algunos será esto una paradoja: para nosotros que de positivistas nos preciamos, es un hecho que nos revela la irresistible lógica de los acontecimientos que ante nuestra vista pasan.

Ahora bien, si esto es una verdad de sentido comun, apreciada igualmente por todos los hombres eminentes, se deduce de ella, que mientras lleven al poder sus principios las dos escuelas que se disputan el triunfo en España, la ciencia administrativa, participando hoy del *más* de unos, y mañana del *menos* de otros,

fluctuará constantemente entre dos contrapuestas influencias, y avanzará recelosa en su camino, temiendo siempre ser detenida y contrariada.

Que esto sea un mal, no hay para qué detenerse en demostrarlo. Lo único que debemos apeteer, á lo que asiduamente deben dirigirse los esfuerzos de los que amen el bien de su patria, y que por su posicion y talento puedan contribuir á que se logre estable y permanentemente es, á que, abandonando el sistema seguido, acepten las dos escuelas cuanto la experiencia haya demostrado producir resultados excelentes para la administracion del pais, bien sea debido á los partidarios de la centralizacion, bien á los esfuerzos de los descentralizadores.

Y lo decimos así, aunque sea una verdad vulgar, porque en materias administrativas no reconocemos otro axioma que el de administrar bien; y ni la escuela centralizadora, ni la descentralizadora tampoco, podrán jamás adquirir títulos suficientes á la gratitud nacional, mientras que por el apego á sus principios, por su exclusivismo é intolerancia, introduzcan la perturbacion en los intereses comunes, derogando una escuela hoy, para ser declaradas vigentes mañana por la otra, sus leyes predilectas.

En tanto que tan plausible día amanezca en el horizonte pátrio, día en que podrá formarse un código administrativo que resista los embates políticos, trabajemos de consuno en crear una jurisprudencia administrativa práctica, valiéndonos al intento de las leyes existentes y de la manera de aplicarlas que observa el Consejo Real, y observó en su época el tribunal contencioso-administrativo. Solo así, y poniendo de nuestra parte la aplicacion debida, podremos adelantar algo en la carrera, obteniendo un conjunto de reglas que nos sirvan en la direccion de los negocios.

Uno de los puntos que mas deben llamar nuestra atencion, en la imposibilidad reconocida de acudir á un código, es indudablemente el saber apreciar el límite que separa la accion judicial

de la accion administrativa, jurisdicciones que tantos puntos tienen entre sí de contacto, divergentes en el modo y objeto mas bien que en la materia. Todo lo que entra en el círculo de la accion administrativa, todo lo que ella protege y ampara contra cualquier tentativa, otro tanto escuda con su égida impenetrable el poder judicial. Derivadas ambas de un mismo tronco, partes integrantes del poder egecutivo, la necesidad de fijar de una manera sólida y estable los derechos del ciudadano, y de garantizarlos contra los abusos del poder, produjo la solucion de continuidad en que por la índole de la Autoridad Suprema se encontraban, quedando por la separacion encargada cada cual de velar en esfera diferente por la debida aplicacion de las Leyes, dispensando justicia á todo ciudadano que en sus legítimos derechos se creyese vulnerado.

Así, al confiarse al poder judicial, investido de la jurisdiccion necesaria, el conocimiento sobre el estado de las personas, sobre la propiedad, posesion y sus desmembraciones, sobre las controversias originadas con ocasion de los contratos, sobre la trasmision de bienes por donacion, ó por últimas voluntades, sobre deslindes, y otras de interés privado, no se despojó al poder egecutivo, en sentido absoluto, de la facultad á él inherente de conocer sobre los mismos objetos, sino que para la bien entendida gobernacion del estado, se separó de él la parte que hacia relacion á todo lo perteneciente al interés privado, para reservarle la que debia tener sobre los mismos objetos, siempre y cuando por circunstancias especiales afectasen el interés comun ó público. Por eso, si á la jurisdiccion judicial compete conocer del estado de las personas, cuando se trata, por egemplo, de la trasmision de una herencia, para decidir si el nombrado heredero tiene ó no derecho, á la accion administrativa corresponde entender sobre el estado de las mismas, si la cuestion versa sobre derechos electorales. Igualmente incumbe á la administracion el conocimiento de un deslinde de propiedad, cuando interesa al comun

de vecinos, á pesar de que la misma cuestión cae bajo la jurisdicción judicial, si afecta solamente intereses particulares.

Y esta división de jurisdicciones tan necesaria y útil al interés individual y al colectivo, esta desmembración oportunísima del poder ejecutivo, en cuya virtud la acción administrativa se ejerce con absoluta independencia del poder judicial, moviéndose desembarazada en el ancho círculo de sus atribuciones, no ha sido deslindada, no ha aparecido con sus propios y distintivos caracteres, hasta el establecimiento del régimen representativo; pues anterior á él, y durante la antigua forma de gobierno se hallaban lastimosamente confundidas, entendiéndose unas mismas autoridades, tales como el Consejo de Castilla, las Chancillerías, Audiencias, Corregidores y Alcaldes mayores y ordinarios, de todas las cuestiones, ya tuviesen el carácter de privadas ya de públicas, ora perteneciesen al orden judicial, ora al administrativo. De aquí emana precisamente la confusión que ha reinado hasta el presente: de aquí la dificultad de comprender clara y distintamente lo que es peculiar de cada jurisdicción: de aquí la falta de luz, de guía, de norte en que se han encontrado los hombres estudiosos para ir esclareciendo tan revuelto caos: de aquí los obstáculos con que han tenido que luchar para ir descifrando su índole especial: de aquí, finalmente, la inestabilidad en los primeros pasos dados en la creación del derecho administrativo, y en la organización de idóneos tribunales; ocasionándose continuas y repetidas invasiones de un poder en las facultades del otro, y careciendo del oportuno criterio para dirimir sus competencias.

Hemos dicho que hasta el establecimiento del régimen representativo en España, no estuvieron perfectamente deslindados los poderes judicial y administrativo: en efecto, los ilustrados escritores que en nuestros días han tratado del derecho administrativo, convienen unánimemente en señalar las Cortes de Cádiz como

autoras de tan utilísima reforma. Bien es verdad, que durante el reinado de Carlos III intentaron sus célebres consejeros crear un sistema administrativo, que pusiese término al desorden que reinaba, y armonizase las Leyes con los medios de ejecución: pero, cuando por todas partes renacía la esperanza, cuando se veía asomar en el horizonte el apetecido momento de lograr, mediante sabias disposiciones, las útiles reformas que con indisputable derecho reclamaban los descuidados intereses del país, circunstancias especiales, debidas en su mayor parte á la revolución francesa, detuvieron, paralizaron, ó disiparon mas bien las mejoras que empezaban á plantearse, y la nación siguió privada de las ventajas en su administración que la proporcionaban los concienzudos trabajos de los Ministros de aquel esclarecido Monarca.

Sin embargo, la semilla habíase esparcido por toda la Península: los principios administrativos llamaron la atención de los hombres pensadores; y apenas se presentó ocasión favorable se manifestaron en todo su esplendor, hallando por doquier justa y benévola acogida. Estudiense los trabajos legislativos de las Cortes de Cádiz por los años 1812 y 1813, y fácilmente convendremos en fijar la época de la regeneración administrativa en los años que hemos apuntado.

Mas cayó el sistema en 1814 para levantarse en 1820, y desaparecer á su vez en 1823; y á pesar del breve período en que dominó el nuevo orden de cosas; á pesar de las luchas intestinas, y de las dificultades que de fuera le asaltaron, todavía pudo fijar y fijó, para no desaparecer nunca, las bases cardinales sobre que debe descansar el edificio administrativo. Acción é independencia del municipio en todo cuanto concierna á los intereses locales, acción é independencia de la provincia en todo cuanto se relaciona con los intereses provinciales; intervención oportuna del poder ejecutivo por medio de los Jefes políticos, hé aquí los puntos culminantes á que se dirigieron los esfuerzos de

los ilustres patricios que entendieron de la cosa pública en aquella época, esfuerzos que dieron provechoso resultado, estableciendo la gerarquía administrativa, así como se conocia de antiguo la gerarquía judicial.

No coronaron, sin embargo, tan magnífica obra: el tiempo les faltó; no la voluntad: harto sabian aquellos entendidos varones que la accion administrativa no debia concluir ni en el municipio, ni en la provincia; que era necesario un tribunal superior que consultase al Rey las decisiones sobre puntos en que no hubiera aquiescencia entre la administracion provincial, y los particulares que se creyesen agraviados. Pero el camino estaba ya trazado, y andando los tiempos se presentó á las Cortes un proyecto de Consejo de Estado, y mas adelante se ultimó la obra con el establecimiento del Consejo Real, en cuya cúspide está el Monarca como regulador supremo.

Nuestros lectores notarán de paso que no hemos hecho apreciacion alguna sobre los principios que han dominado en la formacion de las leyes orgánicas de los tribunales administrativos, tal como se conocen y funcionan hoy en España. No era ese nuestro propósito; y ni lo permite la índole y naturaleza de la Revista en que escribimos. Aun, si rápidamente hemos señalado el origen de la administracion actual, ha sido para manifestar que se hallan perfectamente marcados sus esenciales caracteres, y firme y sólida su organizacion, independiente del poder judicial. De este modo nos será mas fácil investigar y coordinar las reglas, que pueden servirnos para distinguir el límite de accion de ambas jurisdicciones.

Felix Gomez La-Casa.

Tribunales.

LAMENTABLE SITUACION DE LOS RELADORES.

Hace años que nos propusimos escribir algunas líneas para recordar, ya que no dar á cono-

cer la utilidad reconocida, los servicios que viene prestando á la administracion de justicia una clase modesta, laboriosa y en extremo sufrida, los relatores, por si un dia llegaba el departamento de la justicia en nuestra España á ser lo que todos desean. Era á fines de 1850, y nos detuvimos al ver presentar en uno de los cuerpos colegisladores un proyecto de ley por el señor Arrazola, sobre arreglo en parte de los tribunales del reino, en el que se hablaba de la clase á que aludimos; pero vino la epidemia crisis, y con ella la muerte del gabinete en los primeros dias de Enero de 1851. Y aquel proyecto fue retirado para modificarlo, y no se modificó.

Vino luego el Sr. Gonzalez Romero, y allá, en un decreto, que no arreglaba tribunales, se dió tambien categoría á dichos funcionarios; pero ello no produjo resultados, que ya se hacian necesarios á la clase.

Hemos leído muchos, muchísimos artículos proponiendo mejoras en la administracion de justicia, porque la prensa periódica clama sin cesar, y tambien sin resultado; y á pesar de que casi somos escépticos á fuerza de esperiencia, y por consiguiente llegamos á desconfiar de que tengamos un arreglo radical, sólido y cual demanda la civilizacion del siglo, no queremos renunciar por completo á escribir algo, para advertir el conflicto en que puede encontrarse algun dia por no atender al arreglo de tribunales en el todo, ó á la clase de relatores, si aquel no es posible tan pronto.

¿Son necesarios los relatores? Esta pregunta no se le ocurre á persona alguna que conozca la organizacion judicial de nuestros dias; y, sin embargo, nos la hacemos, por si á fuerza de repetirla podemos convencernos de la negativa. Pero en vano, porque es demasiado cierta la conviccion que tenemos de que sin tales empleados es imposible que funcionen los tribunales colegiados, y esto es óbvio para la generalidad, y lo que ésta no conoce, todavia es la verdadera necesidad de aquellos funcionarios; pero renunciemos á explicarla, en razon á que lo sabe el señor ministro del ramo, como no lo ignoran todos los que han servido en dichos tribunales, porque el verdadero trabajo del relator no está en lo que el público vé, si que en lo que pasa en las salas de justicia á puerta cerrada.

¿Cuál será, pues, la causa del olvido completo de una clase absolutamente necesaria en la organizacion judicial? No queremos decir que nace de ser tan necesaria, y estar en escala inferior á

la que sirve, porque esto nos empeñaría en tener que desarrollar un plan de arreglo de tribunales en que elevaríamos á la clase de relatores y suprimiríamos los escribanos de cámara, y algunos otros funcionarios; pero nos abstenemos de ello, porque vemos sublevarse á toda la prensa contra nosotros, y aunque no tememos ser vencidos, porque nuestra convicción es hija de la experiencia de mas de veinte años, sin embargo, no nos atrevemos á engolfarnos en una polémica de la que sin duda ganaría la sociedad, porque de la discusión científica brota la verdad, pero nos sería insostenible, porque nos falta tiempo para ella.

Y entusiastas como somos del poder judicial y de su completa independencia, hemos llegado á soñar que podría elevarse aquel á su verdadera altura, y creemos, quizás sea presunción, que con ello no habia necesidad de tocar el gran caballo de batalla, ó sean los presupuestos, contra el que se estrellan todos los planes de reforma por un error que conocen como tal todos los grandes magistrados que han sido ministros del ramo; pero que violentados por la política no han tenido tiempo de conjurarlo, ni fuera para sofocar las tendencias oposicionistas. Y al llegar aquí no podremos dejar de repetir, como lo indicó ya este periódico en un artículo de hace algunos dias, que los señores Arrazola, Mayans y marqués de Girona son los únicos que han demostrado verdaderos y fecundos planes, pero que no han producido el efecto, porque no se llegaron á desarrollar, y aun planteado parte de alguno de ellos, hubo de sucumbir, porque como era parcial, chocaba abiertamente con la restante organizacion, y su contraste era singular.

Pero nos separábamos del objeto de estas líneas, en las que solo nos proponíamos hablar de los relatores. Las clases en la sociedad valen cuanto tienen. No hablaré de las causas políticas que han venido á disminuir las utilidades de que gozaban aquellos funcionarios, porque, hijas del progreso de la sociedad, las admiten gustosos, por mas que algunas produzcan males á la misma sociedad contra el deseo del legislador; y me concretaré á aquellas que han emanado de no conocer ciertas particularidades. El Sr. Mayans fue el primero que demostró conocer la decadencia de los relatores, y al efecto reformó los aranceles judiciales en sentido favorable á aquellos; no siguieron mucho por cierto, porque una mano, al parecer no muy conocedora de la curia, hizo otra reforma en sentido contrario en 1846, en la que

destruyó por completo aquella obra, y resultó una monstruosidad, y llamámosla tal, porque no creemos tenga punto de comparacion el trabajo, importancia y categoría de un relator con las funciones del escribano de cámara y del procurador. Pues bien: á pesar de ello, en un pleito ordinario de la tramitacion antigua, los derechos devengados por cada uno de éstos escede á los de aquel. La simple enunciacion basta para comprender la injusticia de los aranceles del año 46, que son los que rigen en el dia.

No queremos hablar tampoco de haberse suprimido el mezquino sueldo que disfrutaban, cuyo maximum era de 5,000 rs.; ni de la reforma del Código penal, en virtud de la que entendiéndolo los tribunales de justicia que las costas de defensa son pena, se abstienen de imponerlas en las absoluciones de la instancia, que regularmente obtienen los procesados que disfrutaban algunos haberes; ni de las novedades introducidas por la ley de enjuiciamiento civil, aumentando la cantidad de menor cuantía, y suprimiendo casi por completo la sustanciacion de la segunda instancia, y aboliendo totalmente la tercera; ni de la odiosa preferencia que se ha abrogado la hacienda, cobrando por entero todos los derechos de correo y reintegro de papel, quitando el justo prorateo que habia entre la misma y los alimentos de los curiales, en términos que muchas veces trabajan éstos y aquella lo toma todo; ni de tantas otras cosas como se han conjurado contra la curia, unas necesarias, otras útiles, pero las demás injustas; porque el resumen de todas ellas nos engolfaria en largas discusiones, y porque nuestro deseo es que desaparezca todo ello por medio de un verdadero arreglo, en que se coloque á los relatores en la clase debida, y se les dote convenientemente.

La oportunidad de ello es de todos tiempos; es decir, llévase á efecto ó no la reforma de tribunales, porque nada ha de influir en el plan concebido; puesto que si llevado á efecto el arreglo se les eleva en categoría, como dudamos, y debiera ser, tanto mejor; y si todavía se les hace rebajar, entonces, estimándose cada individuo en lo que vale, obrará como convenga á su decoro; y si no se efectúa la reforma, lejos de perder, se abrá ganado elevando á una clase merecedora, y estimulando á los abogados jóvenes á instruirse para entrar en ella. Y no se ofenderá por ello la noble clase de abogados, porque es muy comun oír decir que los relatores no nacen, sino que se

hacen, y todo letrado, por aventajado que sea, por solo serlo, no llenaría quizás de pronto el sitio de un mediano relator. Y que escasea esta clase de aspirantes, le consta al gobierno, y nosotros, que conocemos y tenemos visto lo que pasa en tres Audiencias, sabemos que no hay los auxiliares necesarios, porque los relatores no ganan para poder pagar decorosamente á aquellos.

La conveniencia de la dotacion es incontrovertible; es cuestion de decoro, y como tal la dilucidó hace años *El Faro Nacional* con el tino y fuerza de conviccion que acostumbra su director al tratarse de dotar á los jueces y promotores; y si entonces se hacia necesaria la adopcion de tal medida, no es mucho mas en la actualidad, en que á la necesidad se añade el que en breve será la única clase que perciba derechos arancelarios, porque recordamos haber oido á un digno funcionario del ministerio del ramo que habia podido conseguir se admitiese su proyecto de que se dotase á los escribanos de primera instancia, y aun que se habia consignado la cantidad necesaria; si á ello se añade que creemos que los escribanos de cámara deben cesar, porque así lo propone la ley de enjuiciamiento civil, si bien son acreedores á una indemnizacion, resultará la verdad de que los relatores serían los únicos subalternos sujetos á arancel.

¿Podrá haber duda en la clase de dotacion que se les deba, atendida la importancia de sus funciones, pruebas que se les exigen y oposicion á que se les sujeta para llegar á obtener la plaza, y cuya oposicion debe conservarse siempre para su provision, por mil y mil razones? No la alcanzamos, y será quizás efecto de nuestro modo de ver y de la idea que tenemos de cómo deberán organizarse los tribunales. En nuestro plan entraria dar la plaza por oposicion; elevar al que la desempeñe á la categoría de magistrado ponente para todos los negocios, con voto como los demás de la dotacion de la sala, si bien ocupando el último lugar, para despues de cierto número de años pasarle á magistrado de número; consignarle algo menos que á éstos, por ejemplo, 4,000 rs.; pero retribuyéndole con un sobresueldo de 6,000 en las Audiencias de segunda clase, 8,000 en las de primera y 10,000 en la de Madrid, con obligacion de montar su despacho con nombramientos de auxiliares aptos de que diese conocimiento al tribunal; debiendo recaer en abogados los que lo requiriesen. Pero no sabemos que las comisiones que han sucedido para discu-

tir diferentes proyectos hayan opinado así, en cuyo caso, y para ocurrir al momento, ya que no se logre la organizacion judicial existente, considérese á los relatores como jueces de término con el sueldo que éstos disfrutaban, y mas los sobresueldos indicados para gastos de despacho.

Pero ¿y el aumento del presupuesto del ministerio del ramo? No nos asusta esta objecion, como indicamos al principio, ni tampoco arredrará al señor ministro, seguro de que, como á nosotros, se le ocurren medios para aumentar los ingresos en mucho mas que importen aquellos gastos, y con alivio de los litigantes y de los procesados.

Desarrollar este pensamiento no es hoy nuestro objeto, porque solo tratamos de demostrar la decadencia de unos funcionarios indispensables, y la necesidad de que se piense en ellos para que no venga á encontrarse el gobierno un día en el conflicto que hemos insinuado al principio. Y vendrá, si, pronto, muy pronto, no se atiende al remedio, porque podrá llegar el día en que haya Audiencia que se encuentre con la renuncia de todos los relatores por no poder soportar el trabajo y los gastos, y de alguna sabemos que les ha hecho alguna indicacion para que aguarden, y que si alguna vacante ha ocurrido, ha tenido poco menos que buscar quien se presentase á oposicion.

Bien conocemos que en otras Audiencias, muy pocas, aun pueden subsistir con mediano decoro; pero tambien les llegará, mas tarde ó mas temprano, el día en que participen del malestar general, prescindiendo de que ello no obsta para que se atienda desde luego á la clase, porque la mayoría es ya la que soporta tan fatales consecuencias.

Concluimos por hoy estas breves indicaciones que nos hemos permitido por el deseo de coadyuvar las escitaciones que tan de continuo hace este periódico, como celoso defensor de los verdaderos intereses de la sociedad en su mas alta escala, pues indudablemente asegurada la independencia y decoro del poder judicial, y cuanto al mismo haga referencia, por medio de la verdadera reforma que las circunstancias demandan hace tiempo, marchará aquella con paso seguro, al menos por uno de los caminos que deben conducirla á afianzar el bienestar y seguridad de la vida é intereses de sus individuos.—F. P. BALAGUER.

Antonio Ballester.

Crónica de los Tribunales.

CUESTION DE PROCEDIMIENTO.

Consulta elevada á la Excm. Junta de Gobierno de esta Audiencia Territorial por el Juez de primera instancia del partido de Vinaroz.

Excmo. Sr. — El Juez de primera instancia del partido de N. á V. E. respetuosamente espone: Que las disposiciones contenidas en el título 3.º de la nueva Ley de enjuiciamiento civil, lo prevenido y mandado en el Real decreto de 28 de Noviembre de 1856 y circular de 16 de Abril último sobre atribuciones, jurisdiccion y competencia de los Jueces de paz para conocer en cierta y determinada clase de negocios, está dando margen á graves dudas, mas graves y trascendentales todavia, porque afectan la validéz ó nulidad de los procedimientos, y por consecuencia, el valor y eficacia legales de los fallos ó decisiones que los terminan.

El Real decreto citado de 28 de Noviembre organizando y reglamentando la institucion de los Jueces de paz, por su artículo 6.º establece, que éstos egercerán la jurisdiccion que la Ley de enjuiciamiento civil les concede, y por el 9.º, que suplirán á los Jueces de primera instancia en casos de ausencia, enfermedad ó vacante.

La referida circular de 16 de Abril último, ratificando en su primer artículo lo preceptuado en el 6.º del mencionado Real decreto, añade, que los Jueces de paz se abstendrán de conocer en asuntos de materia criminal, mientras otra cosa no se disponga; de forma, que no pueden celebrar juicios de faltas, ni prevenir la instruccion de sumarios de que habla el artículo 33 del reglamento provisional, ni pasar ante ellos los de conciliación sobre injurias, exigido espresamente por el artículo 22 de dicho reglamento provisional y por los 1.º y 2.º del decreto de las Cortes de 18 de Mayo de 1821, restablecido en 30 de Agosto de 1836: tambien su artículo 3.º confirma que la sustitucion de los Jueces de paz á los de primera instancia en el desempeño de su cargo se limite y circunscriba á los casos de vacante, ausencia ó impedimento físico.

Ahora bien, fuera de la vacante, ausencia ó impedimento físico, existen otros en que al Juez le es imposible conocer de ciertos y determinados asuntos, por motivos ciertos y especiales tambien;

si ha sido defensor de algunos de los litigantes que intervienen en un pleito, ó ha emitido dictámen en el mismo como Letrado; si es consanguíneo ó afin dentro del cuarto grado de cualquiera de las partes; si es amigo íntimo ó enemigo manifiesto; si él, ó alguno de sus deudos, dentro del citado cuarto grado civil, tienen directa participacion en cualquier sociedad ó corporacion que litigue, circunstancias todas que constituyen causa legal de recusacion, ¿á quién deberá pasar los autos, bien se le recuse, bien no? ¿Deberá remitirlos al Juez de paz, ó hacerlo al Juez de primera instancia cumpliendo así lo acordado en los artículos 133 y 134 de la nueva Ley de enjuiciamiento civil? ¿Si en un procedimiento criminal militan y concurren las mismas razones, deberá pasarlo para su seguimiento y continuacion al Alcalde constitucional ó al Juez de paz? Si la sustitucion de los Jueces de paz á los Jueces de primera instancia no se hallase tan terminantemente limitada á los casos de ausencia, vacante ó impedimento físico de éstos; si tampoco estuvieran tan claros é intergiyersables los artículos 121, 133 y 134 de la nueva Ley de enjuiciamiento civil; si en el párrafo 1.º de la circular de 16 de Abril próximo pasado no se prohibiera rotundamente conocer á los Jueces de paz en asuntos de materia criminal, no habria duda fundada ni atendible, y por consecuencia, el que suscribe no molestaria la atencion de V. E.; pero en su humilde opinion la duda existe con un carácter de gravedad notorio é incuestionable, y á su virtud se dirige á V. E. su legítimo Superior, esponiéndolo sin comentarios de ninguna especie, para que V. E., en su alta ilustracion, se digne resolver lo que considere mas conforme y arreglado á justicia.

A V. E. suplico se sirva estimar esta respetuosa esposicion á los fines indicados. — Vinaroz 4 de Mayo de 1857. — Excmo. Sr. — José Galiana. — Excm. Junta de Gobierno de la Audiencia Territorial.

El Fiscal de S. M., á quien se oyó, dice: que la consulta que el Juez de primera instancia de Vinaroz hace á V. E. en su comunicacion de 4 del corriente, está resuelta por las disposiciones legales que en la misma se citan, y que lo terminante de esas mismas disposiciones, segun el mismo Juez lo reconoce, parece que no ha debido permitirle concebir las dudas que motivaron su consulta. Antes de publicarse la Ley de enjuiciamiento civil eran ya sustituidos los Jueces de primera instancia por los Alcaldes constituciona-

les; y sin embargo, para el caso especial de recusacion se determinó en el artículo 133 que cuando ésta se otorgase y fuese recusado un Juez de primera instancia, se separara del conocimiento del negocio remitiendo los autos, previa citacion y emplazamiento de las partes, al que residiese en el pueblo mas inmediato al domicilio de los litigantes, y si lo tienen diverso, al del demandado. La Ley para esto tuvo una razon muy digna de respeto, porque procediendo la recusacion del interés mas ó menos directo que el mismo Juez ó sus parientes dentro del cuarto grado pueden tener en el negocio, ó de haber emitido en él opiniones que prejuzguen la decision con perjuicio de alguna de las partes; ó de otras causas análogas, parece natural no solo que se le separe del conocimiento del negocio, sino que el pleito mismo se sustancie y decida por otro Juez para evitar hasta la sospecha de que la posicion del recusado pudiera influir de algun modo en su resolucion. En el dia, por el Real decreto de 28 de Noviembre del año pasado y por la circular de 16 de Abril último, los Jueces de paz son los que deben sustituir á los de primera instancia; pero no en manera alguna altera ni revoca lo dispuesto en el art. 133 de la Ley de enjuiciamiento civil, porque limitándose la sustitucion á los casos de ausencia, vacante ó impedimento fisico, no pueden estenderse sus disposiciones al especial de recusacion que es para el que determina el artículo citado, ya porque es distinto de los demás casos para los que está establecida la sustitucion á favor de los Jueces de paz, y ya tambien porque por el solo hecho de nombrarse diversos funcionarios para sustituir á los Jueces de primera instancia, ni cesa la razon de la Ley, ni puede considerarse á los nuevos sustitutos con otras facultades ni atribuciones que las que tenian los antiguos.

Con respecto á los negocios criminales, con solo considerar que en la disposicion 1.ª de la circular de 16 de Abril último se prohíbe á los Jueces de paz conocer de ellos, y que la Ley de enjuiciamiento civil nada ha determinado ni podia determinar con respecto á estos juicios, el Juez de Vinaroz pudo quedar convencido de que, en los casos de recusacion que le ocurran, debe acomodarse á la legislacion y buenas prácticas establecidas con anterioridad á la Ley de enjuiciamiento civil.

En mérito de lo espuesto, cree el Fiscal de S. M. que la junta puede servirse decir al Juez de Vinaroz, que en los casos á que se refiere

en consulta, proceda con arreglo á las Leyes y disposiciones vigentes.

V. E., sin embargo, acordará lo que estime mas justo. Valencia 15 de Mayo de 1857.

La Excm. Junta de Gobierno, por decreto de 20 del mismo mes, se conformó con el dictámen del Sr. Fiscal.

JUICIO CRÍTICO.

La consulta del Juez de primera instancia de Vinaroz ha sido resuelta dentro del rigorismo de la Ley: marcados terminantemente los casos en que los Jueces de paz sustituyen á los de primera instancia en el todo de su jurisdiccion y de sus funciones, fuera de ellos no les es dado conocer de negocio alguno que penda y no se sustancie ante éstos: ya sean recusados por cualquiera de las partes, ya por concurrir algunas de las circunstancias marcadas en el art. 121 de la nueva Ley de enjuiciamiento por ejemplo la de consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado, la de haber sido defensor ó haber emitido dictámen en el pleito ú otra parecida que motive la separacion voluntaria del Juez, su sustituto no es el de paz, es el que designa al art. 133; el Juez de primera instancia que resida en el pueblo mas inmediato al domicilio de los litigantes, y si lo tuvieran diverso el del demandado, escepto lo dispuesto en el art. 134.

Produce sin embargo estraneza la confusion de atribuciones y facultades que hoy están cometidas á los Alcaldes constitucionales y á los Jueces de paz: los Alcaldes constitucionales entienden en los juicios de conciliacion sobre injurias, celebran los de faltas y previenen los sumarios criminales; los Jueces de paz entienden en los de esta clase, en los verbales en que el valor de la cosa litigiosa no esceda de 600 rs: sustituyendo á los de primera instancia en las vacantes, ausencias é imposibilidades fisicas de los mismos, y entonces el que no puede entender en un juicio de faltas lo hace en grado de apelacion: el que no puede prevenir en sumario sustancia y falla una causa criminal, y el que no puede conocer en un asunto en que es recusado ó en el que voluntariamente se separa por un motivo justo el de primera instancia, cuando está ausente ó enfermo, ó el Juzgado sin proveer, lo sustituye en la plenitud de sus facultades: ¿Por qué, pues, esta diferencia? no lo concebimos: no le encontramos la explicacion. ¿Es que con los Jueces de paz en el modo y forma

que ahora se eligen, se han querido crear costumbres y hábitos judiciales que conduzcan y preparen al pueblo para el establecimiento del Jurado? ¿Es que la institucion de los Jueces de paz tiene por objeto dar derecho á los que egerzan tales cargos para ingresar un dia en la carrera de la judicatura mas experimentados y aleccionados en el difícil modo de juzgar? Adóptese uno ú otro pensamiento, la reforma de lo existente en cuanto á tales funcionarios es precisa é indispensable, urgente: de continuar las cosas como se hallan, continuarian tambien sus consecuencias naturales que son la falta de unidad, de armonía y concurrencia en la sustanciacion de los negocios civiles y criminales que tan necesaria es; para que correspondan á su fin confiamos, y según nuestros antecedentes hay probabilidad, de que no se hará desear mucho tiempo.

Felipe Gonzalez del Campo.

Seccion oficial.

ÍNDICE de las disposiciones de interés general contenidas en las GACETAS del mes de Octubre del año último.

MINISTERIO DE ESTADO.

LEY sobre el derecho de faros, que el Gobierno de la republica de Chile ha publicado. (*Gaceta del 11.*)

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REAL ORDEN de 8 de Octubre resolviendo que la de 10 de Agosto último, que prohíbe el que los individuos que son sentenciados por los consejos de guerra ordinarios se les imponga el castigo de servir en otro cuerpo que aquel á que pertenecen, no deroga la de 31 de Diciembre de 1855. (*Gaceta del 17.*)

OTRA del 13 resolviendo que no pueden hacerse nuevas retenciones á los militares encausados además de los dos tercios que se les descuentan de sus sueldos. (*Gaceta del 23.*)

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN de 5 de Setiembre estableciendo una aduana de cuarta clase en el Puerto de San Pedro del Pinatar, provincia de Alicante. (*Gaceta del 1.º de Octubre.*)

OTRA del 23 disponiendo que para fianzas de destinos de rentas estancadas no se admitan fincas urbanas que se hallen situadas fuera de capitales de provincia ó de puertos habilitados. (*Gaceta del 1.º*)

OTRA del 21 declarando que compete á la direccion general del tesoro público, el examen y aprobacion de las cuentas de 1 y 1½ por 100 que se abonan á los comerciantes que pagan al contado el importe de los adeudos. (*Gaceta del 2.*)

OTRA del 26 habilitando la aduana de Adra para la importacion de cereales extranjeros por el tiempo que dure la franquicia de derechos concedida á esta clase de artículos. (*Gaceta del 4.*)

OTRA del 29 resolviendo que los tejidos de seda bordados á mano paguen á su importacion en el reino los mismos derechos que los de su respectiva clase sin bordar con el aumento de 25 por 100; debiendo disfrutar los procedentes de Manila la bonificacion que establece el arancel en todos los casos en el comercio directo. (*Gaceta del 4.*)

OTRA del 29 estableciendo que los contadores de Hacienda pública sustituyan á los comisarios régios de los bancos establecidos fuera de la corte, en las vacantes, ausencias ó enfermedades de dichos funcionarios. (*Gaceta del 9.*)

OTRA de 23 de Setiembre estendiendo á un año el plazo de 15 dias que el art. 120 de la instruccion fija para que los introductores de mercaderías extranjeras soliciten la expedicion de certificados. (*Gaceta del 10.*)

OTRA de 1.º de Octubre dictando reglas para la circulacion de ganados por las fronteras del Reino, (*Gaceta del 10.*)

OTRA del 3 disponiendo que solo se considerarán como incidencias de aduanas las aprehensiones que se verifiquen al tenor de la Real orden de 27 de Octubre de 1856, debiendo entenderse por operaciones de aquellas, cuanto se practique en las mismas de sol á sol, que es el tiempo que diariamente funcionan, con relacion á los buques que se hallen anclados en el puerto y estén bajo la jurisdiccion inmediata de la administracion, comprendiéndose en este caso las presas que se verifiquen en las puertas de las capitales y puntos de reconocimiento, sujetándose al procedimiento administrativo-judicial las demás aprehensiones que tengan lugar fuera de las horas y puntos indicados. (*Gaceta del 10.*)

OTRA del 30 de Setiembre dictando reglas para la espendicion de las guías que deben acompañar á las mercancías así extranjeras como colo-

niales y las de producción nacional susceptibles de confundirse con sus similares extranjeras. (*Gaceta del 8.*)

OTRA del 6 estableciendo un depósito especial de comercio en Santander. (*Gaceta del 12.*)

OTRA del 5 resolviendo que cuando un consignatario destine sus mercaderías á depósito, se le permita reunir en una sola declaración varias pólizas de los registros de ultramar, siempre que se trate de artículos de una misma clase, tarifados en una misma partida del arancel y que pertenezcan al mismo dueño; ejecutándose lo mismo respecto al comercio extranjero y de América cuando las mercaderías se destinen para el consumo. (*Gaceta del 16.*)

OTRA del 10 haciendo extensiva á los cargamentos que procedan de cualquier punto de Europa en que no exista cónsul autorizado, la prescripción del primer párrafo del art. 9.º de la instrucción vigente relativa á que los cargamentos procedentes de los puertos de América, Asia y Oceanía, en que no haya agentes consulares ni aun á la distancia de 30 kilómetros, puedan traer solo una nota del cargador, visada por la autoridad local, acompañando á ella los capitanes el manifiesto ó documento de salida, espedida por la Aduana de donde procedan, ó por la municipalidad sino hubiere aquella. (*Gaceta del 21.*)

REAL DECRETO de 30 de Setiembre disponiendo la inmediata formación de un inventario general de toda la propiedad mueble é inmueble, cuya administración se halla á cargo de los diferentes centros directivos del ministerio de Hacienda. (*Gaceta del 4 de Octubre.*)

REAL DECRETO de 3 de Octubre marcando los precios á que han de espenderse los tabacos en el año 1858. (*Gaceta del 10.*)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ORDEN de 30 de Setiembre dictando reglas para la visura ó refrendo de las patentes de buques, que dirigiéndose á la Península, zarpen de puertos donde no haya agentes consulares de España. (*Gaceta del 1.º de Octubre.*)

OTRA de la misma fecha disponiendo que á los consejeros provinciales supernumerarios que han entendido en las operaciones de la quinta para el actual reemplazo, se les abone por el tiempo que hayan ejercido dichas funciones, la mitad de la gratificación que los propietarios perciben. (*Gaceta del 6.*)

OTRA del 3 de Octubre mandando que al pedir autorización para obras, en cuanto tengan relación con el servicio de sanidad, se acompañe el presupuesto de ellas, informe acerca de su utilidad ó necesidad y pliego de condiciones que haya de servir para la subasta. (*Gaceta del 7.*)

OTRA del 14 resolviendo que el padre pobre, impedido ó sexagenario y la madre viuda, eximen á su hijo que los mantiene, aun cuando desde la infancia tengan adoptado algun espósito. (*Gaceta del 25.*)

MINISTERIO DE MARINA.

REAL DECRETO de 7 de Octubre aprobando el reglamento para la Academia de Estado mayor de Artillería de la Armada, que se inserta. (*Gaceta del 10.*)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO de 30 de Setiembre estableciendo en Madrid una Real Academia denominada de Ciencias morales y políticas, igual en categoría á las cuatro existentes. (*Gaceta del 1.º de Octubre.*)

Otro de 7 de Octubre aprobando el reglamento provisional de la escuela superior de pintura, escultura y grabado, inserto en la (*Gaceta del 8.*)

Otro del 14 aprobando el reglamento provisional para las enseñanzas de veterinaria, que se inserta. (*Gaceta del 21.*)

REAL ORDEN del 5 de Octubre declarando que el párrafo sexto de la disposición 51 del Real decreto de 23 de Setiembre último, no ha derogado lo dispuesto en el reglamento de 10 de Setiembre de 1852, y que por tanto deben ser admitidos á matrícula bajo las condiciones que en él se determinan los alumnos que hayan ganado el quinto año. (*Gaceta del 6.*)

LEY DE INSTRUCCION PÚBLICA.

(Continuación.)

ART. 29. Después del grado de Bachiller en Artes ó de los estudios preparatorios prescritos en los artículos 27 y 28, se exigirán uno ó más años de ampliación, según la índole de las facultades ó carreras á que hayan de dedicarse los alumnos, y en la forma que determinen los reglamentos.

ART. 30. Ninguna facultad ni carrera superior

(*) Véase el número 2.

ó profesional podrá esceder de siete años en la duracion de sus estudios, incluso los de ampliacion. En las facultades se exigirán uno ó dos años mas para el grado de Doctor.

CAPÍTULO I.

De las facultades.

ART. 31. Habrá seis facultades, á saber:

- De filosofía y letras.
- De ciencias exactas, físicas y naturales.
- De Farmacia.
- De Medicina.
- De Derecho.
- De Teología.

ART. 32. Los estudios de facultad se harán en tres períodos, que habilitarán respectivamente para los tres grados académicos de Bachiller, Licenciado y Doctor. No podrán los alumnos pasar de un período á otro sin haber recibido el grado correspondiente.

ART. 33. Los estudios propios de la facultad de Filosofía y Letras son:

- Literatura general.
- Lengua y Literatura griega.
- Literatura latina.
- Literatura de las lenguas molatinas.
- Literatura de las lenguas de origen-teutónico.
- Literatura española.
- Historia universal.
- Historia de España.
- Filosofía.
- Historia de la Filosofía.

A la facultad de Filosofía y Letras corresponden tambien los estudios de Hebreo, Caldeo, Arabe y demás lenguas orientales, cuya enseñanza tenga por conveniente establecer el Gobierno.

ART. 34. La facultad de ciencias exactas, físicas y naturales comprende los estudios siguientes:

- Algebra, geometría y trigonometría.
- Geometría analítica.
- Cálculo diferencial é integral.
- Geometría descriptiva.
- Geodesia.
- Mecánica.
- Física.
- Astronomía.
- Geografía, física y matemática.
- Química.
- Análisis químico.
- Mineralogía.

Botánica.

Zoología.

Geología.

Ejercicios gráficos y trabajos prácticos.

ART. 35. La facultad de ciencias exactas, físicas y naturales se dividirá en tres secciones, á saber:

De ciencias fisico-matemáticas, de ciencias químicas y de ciencias naturales.

Los reglamentos determinarán los estudios que ha de comprender cada una de ellas.

Por la seccion oficial, Eduardo Atard.

Variedades.

El día 20 del pasado Diciembre tuvo lugar la junta general que, con arreglo á Estatutos, celebra anualmente el ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad para la eleccion de la junta de gobierno de este año, resultando elegidos:

DECANO.

D. Simon Cirujeda y Gran.

DIPUTADOS.

- 1.º D. Vicente Ferrer y Fuertes.
- 2.º D. Félix Gomez de La-Casa.
- 3.º D. Tomás Guasp.
- 4.º D. Vicente Llobet y Sanchis.
- 5.º D. José Lopez y Urquizú.
- 6.º D. Joaquin Ramon y Gaspar.

TESORERO.

D. Francisco de Paula Labaila.

CONTADOR SECRETARIO.

D. Eduardo Atard y Llobell.

El Sr. D. Francisco Armengol, Catedrático de esta Universidad en la facultad de jurisprudencia, ha sido nombrado Teniente fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.

D. Pedro Gotaredo, Juez de primera instancia de Colmenar, ha sido trasladado al Juzgado de Albaida, conservando la consideracion de Juez de término que disfrutaba, y D. Antonio Anguita y Alvarez, que desempeñaba este Juzgado, ha sido destinado al de Colmenar.

Hemos tenido el gusto de leer el número pri-

mero de la *Gaceta de administracion*, periódico de derecho administrativo, que ha comenzado á publicarse en la corte y que se dará á luz ocho veces al mes. Tributamos nuestro sincero parabien á sus redactores por el feliz pensamiento que preside á la publicacion y la deseamos larga y próspera vida.

El día 11 de Diciembre último ha sido capturado en el partido de Pacheco, provincia de Murcia, y conducido al Juzgado de Játiva, Paulino Castell y Vila, vecino de Genovés, que se hallaba fugitivo hace cuatro años y estaba sentenciado á muerte en rebeldía por haber asesinado á su convecino Francisco Escribá y Climent. El Juez de primera instancia y Promotor fiscal están practicando con la mayor actividad las diligencias procedentes. Tendremos al corriente á nuestros suscritores del resultado del proceso. Tan interesante captura es debida á la Guardia civil, no habiendo contribuido poco á ella, la actividad del cabo primero Matias Casaus Rigla, jefe del puesto de Játiva.

En algunos periódicos de la corte hemos leído la noticia de si podria aumentarse el precio del papel sellado. No lo creemos.

Del *Diario Mercantil de Valencia* copiamos lo que sigue:

Ya que tanto se habla y escribe sobre estadística, sobre esa ciencia que tantos y tan grandes adelantos ha hecho en el extranjero, y está llamada á hacer entre nosotros, vamos á ocuparnos tambien por nuestra parte de la escrituraria del territorio de esta Audiencia en el quinquenio de 1852 á 1856.

Del resumen numérico, formado en vista de documentos auténticos de las escrituras recibidas por todos los escribanos de los pueblos de las tres provincias comprendidas en dicho territorio, que hemos tenido ocasion de examinar, aparecen:

Nueve poblaciones en cada una de las cuales se han otorgado en todo el referido quinquenio hasta 100 escrituras.

Cuarenta y un pueblos en cada uno de los cuales constan recibidas de 101 á 600 escrituras.

Setenta y tres de 501 á 1,000 escrituras.

Veintiocho de 1,001 á 1,500 escrituras.

Diez y siete de 1,501 á 2,000 escrituras.

Diez de 2,001 á 2,500 escrituras.

Trece de 2,501 á 3,000 escrituras.

Dos de 3,001 á 3,500 escrituras.

Cuatro de 3,501 á 4,000 escrituras.

Fuera de dicho número existen las poblaciones que, con el de las escrituras en ellas recibidas en la época antes citada, se espresan á continuacion:

Oliva.	4,613
Alcoy.	5,207
Elche.	5,818
Segorbe.	6,078
Orihuela.	6,124
Sueca.	6,261
Gandia.	7,092
Alcira.	7,887
Alicante.	8,901
Castellon.	8,982
Játiva.	9,392
Valencia.	52,961

Dando por resultado el siguiente total general:

Años.	Número de escrituras.
En 1852.	60,678
1853.	56,018
1854.	66,549
1855.	78,151
1856.	79,071
Suma.	340,467

Y últimamente, consta haberse otorgado 140 testamentos cerrados.

Por la seccion de variedades, Antonio Ballester.

ERRATAS.

En el número 2.º, página 19, líneas 26 y 27 de la 2.ª columna, donde dice *defraudadora*, léase *defraudada*.

En la página 31, línea 13 de la 2.ª columna, donde dice *lugar*, léase *hogar*.

Y en la página 32, línea 14 de la 1.ª columna, donde dice *Sala 3.ª*, léase *Sala 2.ª*.

EDITOR RESPONSABLE, D. T. PUCHAL.

Valencia: Imprenta de José Rius, calle del Milagro, 1857.